



## Aportes y reflexiones para fortalecer diálogos entre la sociedad civil y el Estado sobre la agenda climática en América Latina

Daniel Ryan, Enrique Maurtua Konstantinidis (FARN)  
Diciembre de 2015

## Mensajes Claves



- Más allá de las orientaciones ideológicas o programáticas de los gobiernos, la existencia de funcionarios y organismos gubernamentales comprometidos con la problemática climática genera oportunidades para las redes y plataformas de la sociedad civil en su interacción con el Estado.
- La capacidad de producir, analizar y difundir información técnica es clave para que las redes y plataformas de la sociedad civil puedan ser parte activa de procesos de formulación y monitoreo de políticas públicas relevantes para la agenda climática nacional.
- Es necesario fortalecer las capacidades de las redes y plataformas de la sociedad civil nacionales para vincular los procesos y las negociaciones internacionales sobre cambio climático con la agenda de políticas domésticas. Esto claramente fortalece la capacidad de las redes para ser un interlocutor del Estado en los procesos de formulación de las posiciones nacionales.
- La vinculación de la problemática climática con otros temas de preocupación o interés nacional o sectorial es clave para construir redes y plataformas más amplias, con mayor capacidad de incidencia en la opinión pública y en la agenda política nacional.

**Acerca de FARN:** La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es una organización no gubernamental, apartidaria, cuya misión es promover el desarrollo sustentable a través del derecho, la política y la participación institucional de la sociedad.

- Sánchez de Bustamante 27, primer piso (C1173AAA), Buenos Aires, Argentina
- [www.farn.org.ar](http://www.farn.org.ar) / [info@farn.org.ar](mailto:info@farn.org.ar) / **Twitter:** @farnargentina / **Facebook:** farnargentina

**Acerca de la PCL:** La Plataforma Climática Latinamericana (PCL) se formó en el 2009. Actualmente, está conformada por 20 organizaciones de la sociedad civil, del campo ambiental, social, empresarial y académico, en 10 países de la región. La PCL es un espacio de convergencia, diálogo y articulación de diversos actores comprometidos a encontrar respuestas para los desafíos del cambio climático; a través de la generación y difusión de conocimiento para la generación de políticas públicas de cambio climático.

- **Blog:** [www.intercambioclimatico.com](http://www.intercambioclimatico.com) / **Twitter:** @intcambioclima / **Facebook:** IntercambioClimático

## Introducción

Durante el transcurso del 2015, y en el contexto de los procesos de elaboración de las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) previas a la COP21, la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) promovió procesos de diálogo nacionales en cinco países de la región (Costa Rica, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) con el objetivo de fortalecer la construcción de plataformas y redes de actores de la sociedad civil y facilitar la interacción con el Estado con el fin de avanzar la agenda climática a nivel nacional e incidir en las posiciones del gobierno en las negociaciones internacionales.<sup>1</sup>

En cada uno de estos países, el proceso fue liderado por una organización local miembro de la PCL, en colaboración con un grupo promotor, conformado por organizaciones sociales, empresariales, gubernamentales o intergubernamentales. Vale señalar que la estrategia y el diseño de los procesos de diálogo, como también los objetivos específicos de dichos procesos, fue definido por los actores locales de acuerdo al contexto de cada país. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el proceso de diálogo se focalizó en el sector azucarero de dicho país con el objetivo de generar propuestas sectoriales para contribuir a los objetivos nacionales en materia de reducción de emisiones. En los casos de Paraguay y Uruguay, los procesos de diálogo se orientaron fundamentalmente a contribuir en la formulación de las contribuciones nacionales (INDCs) de dichos países. En los casos de Brasil y Bolivia, el énfasis estuvo en el fortalecimiento de actores y sectores sociales específicos (fundamentalmente redes de jóvenes) para involucrarlos e interactuar con el Estado en relación a la agenda climática.

En base a las experiencias y los informes nacionales resultantes de estos procesos,<sup>2</sup> el presente informe identifica y analiza tres factores que entendemos son claves a la hora de examinar la capacidad de las redes de la sociedad civil para interactuar con el Estado e incidir en la agenda climática nacional de diversos países de la región.

### Estos factores son:

- La estructura de oportunidades políticas;
- Las capacidades y recursos de las redes y plataformas nacionales que trabajan en temas de cambio climático;
- El nivel de vinculación de los temas climáticos con otros temas de la agenda política local y nacional.

---

<sup>1</sup> En este informe, utilizamos los términos redes y plataformas de la sociedad civil de forma intercambiable

<sup>2</sup> Los informes nacionales están disponibles en el sitio web de la Plataforma Climática Latinoamérica (PCL), <http://intercambioclimatico.com/es/dialogo.html>

## Estructura de oportunidades políticas

Con este concepto hacemos referencia a las características del sistema y del contexto político e institucional de un país, que afectan (ya sea restringiendo o potenciando) las posibilidades de los actores sociales de interactuar con el Estado en relación a la agenda climática. Del análisis comparado de los informes nacionales y de los procesos desarrollados en los cinco países, se destacan dos aspectos claves; el grado de apertura del gobierno para interactuar con los actores no gubernamentales y la presencia de “aliados” en la estructura del Estado.

El grado de apertura se manifiesta, por ejemplo, en la existencia (o falta) de espacios y mecanismos de participación y consulta en relación a la agenda climática, así como en la relevancia política que se le otorga desde el Estado a estos espacios de interacción. En el informe de Brasil, por ejemplo, se señalan una serie de espacios institucionalizados de interacción entre el Estado y actores de la sociedad civil, del sector privado y otros, con relación a diversos temas y procesos de la agenda climática tales como la elaboración del Plan Nacional de Adaptación (PNA), la Contribución Nacional (INDC) y de otros planes sectoriales establecidos por la ley federal de cambio climático (Bortolotto et al, 2015). De la misma manera, en el informe de Paraguay se plantea la importancia de la Comisión Nacional de Cambio Climático como espacio de interacción y concertación público-privado de la agenda climática nacional, sin perjuicio de las dificultades que enfrenta su funcionamiento (Martínez Trabuco, 2015).

Una de las consecuencias relevantes del grado de apertura del gobierno es que afecta sustancialmente en los tiempos, formas y capacidades de las redes de sociedad civil para incidir en la agenda política y en la opinión pública. Las experiencias del proyecto en Uruguay y Bolivia son particularmente ilustrativas de esta relación. En el caso de Uruguay, la nueva administración de Tabaré Vázquez que asumió en marzo del 2015 anunció que la problemática climática sería un tema prioritario de la agenda de gobierno, lo cual representó una clara diferencia con la administración anterior y generó expectativas de mayor interacción entre el Estado y las ONGs y redes que trabajan esos temas. Sin embargo, esta voluntad política de jerarquizar la agenda climática no se materializó a tiempo en la generación de espacios de participación social significativos en la formulación del INDC. En este contexto, el proceso de elaboración del INDC uruguayo se desarrolló fundamentalmente dentro de la estructura de gobierno y con un periodo de consulta con los actores de la sociedad civil sumamente corto (Marrero y Honty, 2015). Desde la perspectiva del proyecto, esto afectó las posibilidades del grupo promotor de generar análisis y articular posiciones en común con otros actores y sectores sociales y empresariales con relación a la propuesta de INDC elaborada desde el gobierno (Marrero y Honty, 2015).

El caso de Bolivia, por su parte, es un ejemplo interesante de cómo la estructura de oportunidades, y en particular el grado de apertura del gobierno, puede afectar la definición de las modalidades de incidencia.

El informe de dicho país destaca la dificultad que enfrentan las redes y actores sociales no vinculadas al gobierno, de acceder e interactuar con los organismos gubernamentales, fundamentalmente en relación con la formulación de las posiciones de Bolivia en las negociaciones internacionales climáticas (Toro Martínez, 2015). En este escenario, caracterizado por la baja apertura del gobierno y limitadas posibilidades de interacción, la estrategia de incidencia del proyecto en Bolivia se orientó a sensibilizar e involucrar nuevos públicos (fundamentalmente jóvenes) para generar una mayor demanda social por políticas públicas sobre cambio climático.

Un segundo elemento clave de la estructura de oportunidades políticas es la presencia de “aliados” en la organización estatal. Con esta noción hacemos referencia a funcionarios gubernamentales, ya sean funcionarios políticos o técnicos, que comparten en general la preocupación por la problemática climática y el interés en avanzar el tema en la agenda política doméstica. Vale aclarar que esto no implica que necesariamente haya acuerdos o consensos entre las redes climáticas y estos funcionarios sobre las políticas específicas del gobierno, pero sí un interés compartido en cuanto a objetivos generales y a fortalecer la agenda de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional y local. Desde la perspectiva de las redes climáticas, la importancia de la presencia de “aliados” en la estructura del Estado puede manifestarse de diferentes maneras: facilitando el acceso e intercambio de información, generando espacios informales pero sustantivos de interacción, etc.

Los procesos desarrollados en los países comprendidos por el proyecto nos brindan distintos ejemplos de la relevancia y los roles que pueden asumir estos aliados. Por ejemplo, en el caso del proyecto en Paraguay, fue clave el trabajo conjunto con la Oficina Nacional de Cambio Climático. Esta oficina fue el punto focal del Estado paraguayo en la preparación de la Contribución Nacional (INDC) y la Estrategia Nacional de Adaptación al cambio climático. Entre otros aspectos positivos, el activo involucramiento de la Oficina facilitó el acceso y la interacción de los actores sociales y empresariales con otras agencias y reparticiones de gobierno en el proceso de formulación del INDC de Paraguay (Martínez Trabuco, 2015).

En el caso de Costa Rica, el trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía facilitó el involucramiento del sector privado. Como se mencionó previamente, el proyecto en Costa Rica se focalizó en generar un proceso de diálogo para la reducción de emisiones en el sector azucarero, un sector clave de la economía costarricense. Sin embargo, de acuerdo al informe de Costa Rica, la relación Estado y sector empresarial en dicho país se ha caracterizado por la desconfianza, lo que dificulta la generación de espacios de diálogo público-privado (Retana y Kopper, 2015). En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Energía asumió un compromiso de apertura hacia las propuestas del sector privado que fue clave para la construcción de confianza sobre la potencialidad y seriedad del proceso de diálogo, facilitando el involucramiento de los sectores industriales (ingenios) y agrícolas (productores) que conforman la cadena productiva del sector azucarero en Costa Rica.

El caso de Brasil, por su parte, nos plantea algunos ejemplos interesantes de cómo desde la sociedad civil se pueden realizar acciones para identificar y cultivar relaciones con actores gubernamentales que a su vez pueden transformarse en potenciales aliados en la promoción de la agenda climática. En el marco del proyecto en Brasil, se organizó un “advocacy tour” que consistió en una serie de reuniones con distintos ministerios y organismos del Estado federal para abordar diversos aspectos de la problemática climática brasileña (Bortolotto et al, 2015). Particularmente novedoso fue el acercamiento realizado desde el grupo promotor del proyecto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Estos ministerios generalmente no están involucrados en el debate y la formulación de la agenda climática brasileña, pero sus acciones pueden tener un impacto muy significativo en la opinión pública, por ejemplo, con la incorporación de la problemática climática en programas de educación o culturales. Como resultado de estas reuniones, se establecieron líneas de comunicación y se identificaron referentes en estos ministerios con los cuales avanzar acciones específicas.

La relevancia de estos aliados en la estructura del Estado es particularmente importante en contextos donde el nivel de apertura del gobierno es bajo. Bolivia, por ejemplo, es un caso interesante de este tipo de dinámica. En un contexto, donde la agenda climática (y en general la agenda de protección ambiental) se percibe como un obstáculo a las políticas de desarrollo del gobierno, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) es vista por diversos actores sociales como un aliado dentro del Estado nacional, que genera espacios y alianzas institucionales y sociales para avanzar en la implementación de diversas políticas y medidas de relevancia climática. De la misma manera, los gobiernos subnacionales, y en particular los municipales, han adquirido una relevancia especial como potenciales aliados estratégicos para desarrollar proyectos y acciones específicas en relación a la problemática climática, especialmente en temas de adaptación (Toro Martínez, 2015).

En resumen, la estructura de oportunidades políticas puede afectar tanto la definición de los tiempos y momentos de la incidencia como las formas y estrategias que pueden adoptar los actores sociales para incidir en la agenda política y en la opinión pública. Sin embargo, también es importante resaltar que las mismas acciones de los actores sociales al igual que otros factores contextuales pueden modificar esa estructura de oportunidades.

En este sentido, es razonable suponer que la aprobación del Acuerdo de París en la COP 21, y la mayor atención que la problemática climática está recibiendo por parte de la opinión pública y la prensa de los países de la región, puede impactar favorablemente en la estructura de oportunidades políticas.<sup>3</sup> En particular, los procesos de implementación y renovación de los INDCs pueden generar nuevas ventanas de oportunidades para interactuar con el Estado y dar nuevo impulso a la agenda y política climática doméstica.

---

<sup>3</sup> Agradecemos a Yan Speranza por sugerir este punto.

## Fortaleza de las redes climáticas

En esta sección abordamos las estructuras organizativas, tanto formales como informales, a partir de las cuales los actores sociales participan y tratan de incidir en la agenda política nacional con relación a la problemática climática. En tanto el análisis de la estructura de oportunidades políticas implica examinar factores externos, el foco de esta sección está en los actores sociales, en sus recursos y capacidades. Hay una extensa literatura que analiza los distintos tipos de recursos y capacidades de las organizaciones sociales para el trabajo de incidencia (por una revisión ver Leiras, 2007). A partir de esta literatura, y en base a la experiencia de los procesos desarrollados en los cinco países de la región, hemos identificado ciertos recursos críticos para fortalecer la interacción de las redes de sociedad civil con el Estado en relación con la agenda climática. En este sentido, queremos señalar dos aspectos en particular:

En primer lugar, la capacidad de producir y analizar información técnica es un factor clave para ser parte activa de los procesos de formulación y monitoreo de políticas públicas relevantes para la agenda climática. El caso del Observatorio do Clima de Brasil es un buen ejemplo de ello. El Observatorio es una red de organizaciones de la sociedad civil y académicas que hacen seguimiento de la agenda climática en Brasil. Entre sus diversas acciones, el Observatorio ha generado un sistema independiente de estimación anual de emisiones de gases de efecto invernadero (SEEG) que le permite producir información relevante y actualizada.<sup>4</sup> La capacidad de generar este tipo de información claramente fortalece la participación de los actores sociales en el debate de la política pública sobre cambio climático en Brasil. Por ejemplo, con relación al INDC elaborado por el gobierno brasileño, el Observatorio presentó sus propias estimaciones y propuesta de reducción de emisiones (Bortolotto et al, 2015). El análisis desarrollado desde el Observatorio básicamente planteó que era posible y viable para Brasil asumir un nivel de ambición mayor al propuesto por el gobierno de forma tal de poder contribuir a alcanzar el objetivo global de no superar los 2°C.

En el marco del proyecto desarrollado en Brasil, esta información y análisis fue también un insumo para que el colectivo de jóvenes de la red Engajamundo, elaborase y presentase al Gobierno una propuesta propia de reducción de emisiones (Bortolotto et al, 2015). Los ejemplos mencionados claramente muestran la relevancia de estos recursos y capacidades para fortalecer la participación social en el debate sobre la política climática. Es importante subrayar, sin embargo, que los ejemplos comentados sobre la experiencia brasileña no son comunes en la región. Esto nos habla de las debilidades, y específicamente, de la falta de disponibilidad de información y análisis, que enfrentan las redes y plataformas de la sociedad civil en muchos países de América Latina para ser actores en los procesos de discusión y monitoreo de la política climática nacional.

---

<sup>4</sup> Para mayor información sobre el Observatorio del Clima y el sistema SEEG, ver <http://www.observatoriodoclima.eco.br/> y <http://seeg.eco.br/>

El segundo factor que quisiéramos destacar se refiere a las limitaciones que tienen los actores sociales a nivel nacional para seguir las negociaciones internacionales y generar puentes y conexiones entre la agenda internacional y nacional. Esta dificultad afecta la capacidad de ser un interlocutor informado con los organismos del Estado que participan en la formulación de las posiciones nacionales para las negociaciones internacionales y en la intersección entre la agenda internacional y las políticas domésticas. Es probable que estas limitaciones de las redes nacionales adquieran una mayor relevancia en el contexto post-París, en el cual la implementación de las contribuciones nacionales sea un tema crítico de la agenda climática tanto a nivel global como nacional.

Estas dos observaciones subrayan la relevancia de construir y fortalecer las estructuras de apoyo para la participación social en cambio climático a nivel nacional en América Latina. Con este término (“estructura de apoyo”), básicamente, hacemos referencia a un conjunto de capacidades y recursos organizacionales que facilitan y fortalecen el involucramiento de las redes ciudadanas y actores sociales nacionales en el debate sobre la agenda y políticas públicas de relevancia climática. El involucramiento y el seguimiento de la agenda climática nacional e internacional –especialmente su vinculación y relevancia con las agendas sectoriales– requiere de recursos y capacidades (recursos humanos especializados, dedicación de tiempo, conocimiento temático, etc.) de los que probablemente los actores sociales carezcan o les sea muy costoso generar en forma individual. En este contexto, las estructuras de soporte reducen los costos de la participación social, facilitando a los actores sociales el acceso y análisis de información relevante, brindando apoyo especializado para la articulación de posiciones y propuestas de política pública sobre cambio climático. En este sentido, la experiencia del Observatorio do Clima de Brasil mencionado anteriormente, así como de la red SEEG Perú (formada por ONGs, universidades y otros actores),<sup>5</sup> son ejemplos de iniciativas en la región que tienden a cumplir este rol de estructuras de apoyo de la participación social en temas de cambio climático.

## Vinculación de la problemática climática con temas de la agenda local/nacional

Los informes del IPCC, al igual que numerosos otros trabajos, subrayan la importancia de integrar la problemática climática en las agenda de desarrollo nacionales al igual que en las políticas sectoriales. Desde una perspectiva de análisis político, la vinculación de la problemática climática a otros temas de preocupación local o sectorial y la generación de co-beneficios aparece como un factor clave para construir plataformas y redes más amplias, que permitan avanzar con medidas y políticas públicas de relevancia climática a nivel local y nacional.

---

<sup>5</sup> Para mayor información sobre SEEG Perú, ver <http://pe.seeg.global/>

En otro artículo (Ryan, 2015), hemos desarrollado este argumento sobre la relevancia del encuadre local de la política climática para generar apoyo social y político. El grado en que la política climática está vinculada a preocupaciones nacionales/locales incide en gran medida en cómo los actores locales (empresarios, sindicatos, consumidores, etc.) perciben los costos y beneficios de esa medida. Este es un tema crítico, especialmente para las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se caracterizan por generar beneficios globales y de largo plazo. Este tipo de políticas públicas, que benefician en forma difusa a grandes sectores de la sociedad, tienden a enfrentar serios problemas de acción colectiva, lo que muchas veces dificulta la generación y sostenimiento del apoyo político y social necesario para implementar dichas medidas de gobierno. Estas características de la política climática sugieren que para avanzar acciones y estrategias de reducción de GEI es clave partir de problemas de relevancia nacional o sectorial (congestión del tránsito en ciudades, crisis energética, mejora de competitividad, etc.) con el fin de construir coaliciones sociales y políticas de apoyo más amplias y fuertes.

Los procesos nacionales desarrollados en el marco del proyecto demuestran la relevancia y pertinencia de vincular la problemática climática con las agendas sectoriales, de forma tal que se amplíen las plataformas sociales de apoyo. En el caso del proceso de diálogo en Uruguay, por ejemplo, participaron actores y organizaciones que trabajan en diferentes temas y que no tenían necesariamente a la problemática del cambio climático como el eje central de su actividad. Las principales motivaciones de estos actores para participar e involucrarse en este proceso estaban dadas fundamentalmente por la posibilidad de lograr objetivos vinculados a sus sectores o tema de interés (Marrero y Honty, 2015). A título de ejemplo, se puede mencionar la “Alianza del Pastizal”, una organización de productores ganaderos que impulsa la revalorización del pastizal natural en Uruguay y promociona la calidad de la carne que resulta de los animales criados en dichos ecosistemas.

Tal como lo plantea el informe sobre Uruguay, la agenda climática no es un tema central de este conjunto de productores ganaderos; sin embargo el potencial del pastizal natural como sumidero de carbono puede operar como un valor agregado a su producto, fortaleciendo la competitividad del sector en el mercado internacional de la carne. Otro de los actores del proceso de diálogo en Uruguay fue el colectivo de organizaciones que impulsan la agenda de movilidad urbana sustentable, en particular el uso de la bicicleta. Al igual que en el caso anterior, para este conjunto de organizaciones, la reducción de emisiones de GEI no es un objetivo central de su trabajo institucional, pero sí lo es la promoción de políticas públicas que impliquen una reducción del parque automotor en los centros urbanos, generando ciudades más amigables para la movilidad sustentable (Marrero y Honty, 2015). Estos ejemplos del proceso desarrollado en Uruguay claramente demuestran cómo la vinculación de la problemática climática con las agendas sectoriales puede facilitar la incorporación e involucramiento de nuevos actores y sectores en plataformas y redes que promueven políticas climáticas.

Para ello, la identificación y generación de oportunidades de co-beneficios es un factor clave en los procesos de construcción de estas alianzas más amplias. El proceso de diálogo con el sector azucarero de Costa Rica es un interesante ejemplo de esta dinámica. Uno de los aspectos centrales de este proceso fue identificar y validar en conjunto con representantes del sector azucarero, medidas que implicarán reducciones de emisiones de gases efecto invernadero a la vez que generasen co-beneficios para el sector (Retana y Kopper, 2015). En este marco, se identificaron y validaron cuatro líneas de acción específicas: cogeneración de energía para ser incorporada a la matriz energética nacional, a partir del uso del exceso de bagazo no utilizado por los ingenios azucareros; medición de huella de carbono; medidas de eficiencia energética; y producción de etanol para el mercado nacional lo cual permitiría la reducción de las importaciones de hidrocarburos. Asimismo, se acordaron otras medidas paralelas como la creación de un NAMA para el sector y la incorporación en programas nacionales de gestión ambiental como el Programa Bandera Azul Ecológica (AED, 2015). El desarrollo e implementación de estas líneas de acción requiere de compromisos y acciones tanto del sector azucarero como del sector gubernamental. En relación a este punto es importante destacar que el trabajo de identificación y validación de este conjunto de medidas fue realizado por el grupo promotor en conjunto con directivos y técnicos de los ingenios azucareros y representantes de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Esto claramente habla de la viabilidad sectorial de este paquete de medidas como también de las perspectivas de apoyo que puede brindar el sector azucarero para avanzar estos temas en la agenda pública de Costa Rica.

## Recomendaciones y comentarios finales

El análisis desarrollado en base a las experiencias de los procesos de diálogo llevados a cabo en Brasil, Bolivia Costa Rica, Paraguay y Uruguay, nos permite plantear algunas reflexiones finales sobre cómo las redes de la sociedad civil en la región pueden fortalecer su capacidad para interactuar con el Estado e incidir en la agenda climática a nivel nacional:

**1.** Es clave **identificar oportunidades de sinergia y cooperación con funcionarios y organismos estatales.** La presencia de “aliados” en materia de cambio climático dentro de la estructura del Estado facilita las posibilidades de las redes de actores sociales de acceder a instancias de diálogo e interacción con el gobierno. Los casos de la la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) en Bolivia o de la Oficina Nacional de Cambio Climático en Paraguay mencionados en el informe, son algunos ejemplos de los diferentes tipos de relaciones de cooperación y sinergia que se pueden generar con organismos del Estado.

**2.** Es necesario **construir estructuras de apoyo para la participación social en temas de cambio climático en los países de la región.** Con el término “estructura de apoyo” hacemos referencia a instituciones o redes de instituciones con capacidad de producir, analizar y difundir información relevante para la discusión pública sobre política climática. Estas estructuras de apoyo reducen los costos individuales de los actores sociales en involucrarse en el debate sobre la agenda climática, facilitando el acceso y análisis de información y brindando soporte especializado para la articulación de posiciones y propuestas de política pública sobre cambio climático. El caso del Observatorio do Clima y su sistema de estimación anual de emisiones de Brasil (SEEG) es un buen ejemplo de cómo estas estructuras de apoyo pueden generar información y análisis que fortalezcan la participación social en el debate sobre la política climática a nivel nacional.

**3.** Es preciso **fortalecer las capacidades de las redes de sociedad civil nacionales para vincular las negociaciones internacionales sobre cambio climático con la agenda de políticas domésticas.** Esta capacidad de articular “lo internacional” y “lo nacional” es un elemento que incide fuertemente en las capacidades de los actores sociales para ser interlocutores de organismos de gobierno en materia de política climática, y fundamentalmente, en relación a la formulación de las posiciones nacionales en los procesos de negociación internacional. Está es una de las funciones claves que pueden cumplir las estructuras de apoyo señaladas previamente.

**4.** Es esencial **integrar la problemática climática con otros temas de preocupación o interés nacional o sectorial.** Esta integración facilita la construcción de redes y coaliciones sociales y empresariales más amplias, con mayor capacidad de incidencia en la agenda política y en la opinión pública. Las experiencias desarrolladas en Uruguay y en Costa Rica analizadas en el informe claramente demuestran cómo la vinculación de la problemática climática con las agendas sectoriales puede facilitar la incorporación e involucramiento de nuevos actores y sectores en el debate sobre la agenda y las políticas de relevancia climática.

## Referencias

- AED. 2015. Sexta Entrega. Validación de co-beneficios para el sector Azucarero.
- Bortolotto, Medeiros & Hiron. 2015. Supporting civil society to strengthen national climate change agendas and institutional capacity in Latin America to influence the new global climate agreement - BRASIL. PCL- IPAM.
- Leiras, Marcelo. 2007. "Observaciones para el análisis y la práctica de la incidencia." In La Incidencia Política de la Sociedad civil, ed. C. Acuña and A. Vacchieri. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina
- Marrero, Laura. & Honty, Gerardo. 2015. Documento de Agenda Nacional Climática, Uruguay. PCL - CEUTA
- Martínez Trabuco, Jorge. 2015. Agendas Climáticas Prioritarias en Paraguay. PCL - Fundación Moisés Bertoni.
- Retana Corrales, Daniela & Kopper Castro, Manfred. 2015. INDCs: Facilitación del diálogo público-privado para el establecimiento de acuerdos sectoriales, Costa Rica. PCL - AED
- Ryan, Daniel. 2015. 2015. "From Commitments to Action: A literature review on climate policy implementation at city level". Climatic Change Journal. Volume 131; Issue 4. 519-529.
- Toro Martínez, Marco. 2015. Documento agenda nacional climática, Bolivia. PCL -Fundación Natura

---

Este documento es el resultado de un proyecto encargado a través de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). CDKN es un programa financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. Las opiniones expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, la DGIS o las entidades encargadas de la gestión de la Alianza Clima y Desarrollo, quienes no podrán hacerse responsables de dichas opiniones o información o por la confianza depositada en ellas.